

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

1

AUTO N° 000947 DE 2013

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

La Gerente de Gestión Ambiental (C) de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. con base en lo señalado en el Acuerdo N° 006 del 19 de abril de 2013 expedido por el Consejo Directivo, y en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución N° 00205 fechada 26 de abril de 2013 CRA, la Constitución Nacional, Ley Marco 99 de 1993, teniendo, Ley 1333 de 2009, Decreto 1713 de 2002, Decreto 838 del 2005, Decreto 1541 de 1.978, Ley 1437 del 2011 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Presupuestos Fáticos

Que esta Corporación mediante Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010 otorgó licencia ambiental, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos líquidos y autorización de aprovechamiento forestal a los señores Diego Mujica Corchuelo y Jaime Galvis Vergara.

Que esta Corporación mediante Resolución No 01031 de 13 Diciembre de 2.011, avala la cesión de las autorizaciones y permisos conferidos en la Resolución No 00622 de 2.010 al señor RAÚL JAVIER LÓPEZ CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía 7.958.12, en su condición de representante legal de la concesión minera EXQ-091

Que la Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010, en su artículo segundo impuso unas obligaciones a los beneficiarios de los permisos y autorizaciones, entre los deberes ordenados están: Análisis hidráulicos para proponer ubicación de sedimentadores, cronograma de actividades para mejorar calidad de vida de los habitantes de las comunidades Rancho Grande y el Mirador, asentamientos colindantes con la explotación minera ubicada en el Kilómetro 13 de la Vía que conduce del Municipio de Sabanalarga al Municipio de Manatí, monitoreo semestral de los vertimientos.

Que mediante Auto 00505 de 13 de Agosto de 2.012 la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, ordena la apertura de una investigación sancionatoria en contra del señor RAÚL JAVIER LÓPEZ CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía 7.958.12, en su condición de representante legal de la concesión minera EXQ-091, en aras de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental.

Que esta Corporación mediante Resolución 0001 de Enero 9 de 2.013, niega una concesión de aguas subterráneas al señor RAÚL JAVIER LÓPEZ CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía 7.958.12, en su condición de representante legal de la concesión minera EXQ-091, este acto administrativo se notificó mediante aviso 0045 de Mayo 31 de 2.013.

Que una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental se hace imperioso ejecutar labores de verificación de los hechos, tal como lo ordena el artículo 22 de la ley 13339 de 2.009, que señala "La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios"

En procura de alcanzar esa constancia probatoria, esta Corporación el día 6 de Marzo de 2.013, practicó visita al lugar de la explotación minera, que derivó en el informe técnico 00402 de 28 de Mayo de 2.013, informe que tiene como principal conclusión la siguiente:

AUTO N° DE 2013

Nº . 0 0 0 9 4 7

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

- La cantera no cuenta con permiso de concesión de agua, debido a que esta fue negada según resolución 0001 de 2.013, por lo tanto el agua captada en la cantera es realizada ilegalmente.

Que no existe constancia dentro del expediente No 1709-286 que adelanta esta Corporación Ambiental, de documentos y actividades que corroboren el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010

Que el párrafo del artículo 1 de la ley 1333 de 2.009 presume la culpa o dolo del infractor que tiene la carga de la prueba para desvirtuar las conductas que se le endilgan.

Presupuestos Legales.

Es pertinente, tener en cuenta lo que expresado por la Constitución Política de la República de Colombia artículo 80 *"El Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."*.

Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional, al respecto en la sentencia C – 595 del 27 de Julio de 2010, M.P. Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO, en este sentido: *"... respecto a la carga probatoria en materia ambiental, aseguró con la expedición de la Ley 1333 de 2009, se procuró otorgar una lectura más renovada de la protección del medio ambiente y los principios que la inspiran en el mundo contemporáneo, en la búsqueda de avanzar significativamente frente a las debilidades del procedimiento administrativo sancionador. Así declara la titularidad del poder sancionatorio administrativo en cabeza del Estado, establece un procedimiento ambiental claro y expedito que garantice el debido proceso administrativo y define las medidas preventivas y sancionatorias en materia ambiental, entre otros aspectos. La función de las sanciones administrativas en materia ambiental es preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y fines de la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. ..."*

La regla general que en materia sancionatoria ambiental lleva a presumir la culpa o el dolo en las infracciones ambientales, presunción que encaja dentro de las denominadas presunciones legales –iuris tantum- toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura literal del texto de los párrafos cuestionados. En esa medida, antes de imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción utilizando todos los medios probatorios legales. Para la Corte, la presunción legal establecida y la consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia. A su juicio, este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador en desarrollo de su potestad de configuración, busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia como lo es la conservación del ambiente sano para la preservación de la humanidad. Bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de derecho (arts. 1º, 2º y 366 C.P.), un derecho fundamental por conexidad al estar ligado a la vida y la salud (arts. 11 y 49 C.P.), un derecho colectivo que compromete a la comunidad (art. 88 C.P.) y un deber constitucional en cabeza de todos (arts. 8º, 79, 95 y 333 C.P.). De ahí el reconocimiento internacional de que el medio ambiente es un patrimonio común de la humanidad porque su protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo, la responsabilidad administrativa ambiental que se establece en las normas parcialmente demandadas, surge como consecuencia de la degradación de bienes de naturaleza generalmente demanial (aguas, montes, espacios naturales) o de valores difusos (salud humana). El "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente" como objetivo del desarrollo del milenio (Meta 7ª) de la Organización de las Naciones Unidas, representa las necesidades humanas y los derechos básicos de todos los individuos del planeta y el

AUTO N° DE 2013

Nº • 0 0 0 9 4 7

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

no alcanzarlos podría multiplicar el riesgo mundial de inestabilidad y degradación del medio ambiente. En ese sentido, la aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de importancia trascendental para la sociedad. Atiende a la preocupación universal de consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y garantizar un modelo sostenible de desarrollo).

Para la Corte, la creación de la presunción legal supera el juicio de razonabilidad por cuanto atiende la correspondencia entre la experiencia –circunstancias ambientales de degradación- y la defensa del bien jurídico constitucional –preservación del ambiente sano para la supervivencia de la humanidad- bajo los principios internacionales ambientales. Si bien la regla general es que los sujetos procesales deben demostrar los hechos que alegan como fundamento de la pretensión –onus probando incumbi actori- también lo es que con el ánimo de propender por la efectividad de los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, el legislador podía liberar al Estado de la carga de la prueba –redistribución de las cargas procesales- sin perjuicio del que presunto infractor pueda desvirtuar la culpa o el dolo mediante prueba en contrario. En esa medida, la presunción general establecida en las normas demandadas se acompasa con la Constitución, toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con el procedimiento sancionatorio regulado en la Ley 1333 de 2009. Advirtió que las disposiciones condicionadas no establecen una presunción de responsabilidad sino de culpa o dolo del presunto infractor ambiental, por lo que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad. De este modo, la presunción general consagrada en las normas mantiene una responsabilidad de carácter subjetivo, conforme a unas características especiales y supera el juicio de proporcionalidad por cuanto tiene un fin constitucionalmente válido como lo es la efectiva protección del ambiente sano para la conservación de la humanidad y constituye una medida idónea y adecuada para esta salvaguarda. Dada la posición de garante que también tienen los particulares, resulta indispensable la medida por la carga de responsabilidad mayor frente a la protección del medio ambiente sano.

Que el **Artículo 5° de la ley 1333 de 2009** determina: *Infracciones.* Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación

Que el artículo 24 de la ley 1333 de 2.009 ordena que se formularan cargos Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado

Que la infracción a la legislación ambiental se puede tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir con las obligaciones legales.

AUTO N° DE 2013
N° 000947

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que contraría las disposiciones legales.

Por omisión se controvierten las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación o condición para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente.

Indicado lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y siempre actuando en pro de la protección del medio ambiente, considera que el investigado incurre en una presunta transgresión a la normatividad ambiental al incumplir con las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010 y realizar aprovechamiento de agua para uso de actividades mineras sin la respectiva concesión de aguas que lo autorice

Que las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas, incluyendo el componente social, es decir el efecto producido sobre el tejido social. Es por tal motivo, que la ley ha dotado a diferentes instituciones de variadas facultades, tendientes a controlar fenómenos que puedan producir deterioro o afectaciones al medio ambiente y/o los recursos naturales renovables,.

Que el parágrafo 3º del artículo 85 del título XII de la ley 99/93, establece para la imposición de sanciones el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o estatuto que lo modifique o sustituya.

Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99/93, enumera como una de las funciones a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados".

Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, establece que "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".

Así mismo el artículo 2º ibídem, consagra que "El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo

AUTO N° DE 2013

N° 000947

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y Distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades."

Que de conformidad con el artículo 18° de la Ley 1333 de 2009 "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

Que el investigado desarrolló un presunto quebrantamiento por acción y omisión del orden legal ambiental, a través de la ejecución de una conducta a título de dolo, que se materializa con el incumplimiento de los requerimientos dispuestos en el artículo segundo de la Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010 y realizar aprovechamiento de agua para uso de actividades mineras sin la respectiva concesión de aguas que lo autorice

Teniendo como base en las anteriores consideraciones, y bajo el entendido que esta entidad debe velar por la protección a los Recursos Naturales Renovables y propender por la conservación de un ambiente sano como patrimonio público, a lo que se aúna que a las Corporaciones Autónomas Regionales les compete ejercer las funciones de control y seguimiento ambiental a las actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, y dada la prueba recaudada, se

DISPONE

PRIMERO: Formular al señor RAÚL JAVIER LÓPEZ CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía 7.958.12, en su condición de representante legal de la concesión minera EXQ-091, el siguiente pliego de cargo:

- **Cargo Uno:** Presuntamente haber transgredido el investigado el artículo 54 del decreto 1541 de 1.978 que establece: *"Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión"*

Cargos dos: Presuntamente haber incumplido el investigado con las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la Resolución No 00622 de 2 de Agosto de 2.010 y que se refieren específicamente a las actividades que deben cumplir los beneficiarios de una licencia ambiental, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos líquidos y autorización de aprovechamiento forestal

SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2.011.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal del o de los investigados, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2.011

AUTO N° DE 2013

N° . 0 0 0 9 4 7

POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA RAUL JAVIER LÓPEZ CAMACHO IDENTIFICADO CON CÉDULA 7.958.121, CONCESIÓN EXQ-091

TERCERO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el señor RAÚL JAVIER LÓPEZ CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía 7.958.12, en su condición de representante legal de la concesión minera EXQ-091, persona natural con dirección de notificación en la calle 20 No 19 – 19 Municipio de Sabanalarga, Atlántico, podrá presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

CUARTO: Practicar las pruebas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de infracción a las normas sobre protección ambiental.

PARAGRAFO: La totalidad de los costos que demande la práctica de prueba serán a cargo del presunto infractor.

QUINTO: contra el presente acto administrativo procede en el recurso de reposición en efecto devolutivo, tal como lo establece, el inciso primero del artículo 24 de la ley 1333 de 2.009.

Dado en Barranquilla a los 26 NOV. 2013

NOTIFÍQUESE, Y CUMPLASE



JULIETTE SLEMAN CHAMS
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (c)